

## EL MAL LEGADO DE PIÑERA

En su obsesión de que se valore "su legado", la administración Piñera sigue cometiendo errores políticos que lo mantienen con un 70% app de desaprobación ciudadana y colocando en riesgo el futuro del país.

Ha impulsado una pensión garantizada universal para el 90% de los pensionados por \$185.000, pero sin financiamiento fiscal permanente y de largo plazo que de sostenibilidad fiscal al pago del beneficio.

Diversos economistas y parlamentarios de oposición insistieron que se requieren ingresos fiscales permanentes para financiar nuevos beneficios sociales lo que fue desestimado por el gobierno y ahora el Consejo Fiscal Autónomo ha reiterado similares críticas señalando que ante la reducción del aporte obligatorio que se hace anualmente al Fondo de Reserva de Pensiones "el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente", también cuestiona el uso de la programación financiera al 2026 como fuente de financiamiento e insiste que debe hacerse un cálculo de sostenibilidad fiscal a 50 años, ya que es riesgoso "para la consolidación fiscal si se considera esta provisión al 2026 como financiamiento permanente".

Es de esperar que este informe del CFA modifique la tozudez de Hacienda y se entre a discutir en serio sobre nuevas fuentes de financiamiento fiscal, como por ejemplo el Royalty Minero que ha tenido un largo debate técnico y político en Comisión de Minería del Senado donde se coincidió que la tasa efectiva de tributación de la minería actual se encuentra en un rango medio-bajo (38% - 40%) relativo a otros países mineros, por lo cual existiría espacio para aumentar la carga sin comprometer la competitividad de la industria en el mediano y largo plazo.

Existen distintas fórmulas que permiten aumentar la carga tributaria de la minería hasta 10 puntos porcentuales, lo cual situaría a Chile dentro medio-alto en término de tasas efectivas de tributación, pero dentro de un rango competitivo y que fueron el fundamento de las indicaciones presentadas en las últimas semanas en la Comisión Minería del Senado que permiten recaudar de modo permanente hasta 0,5% del PIB.

También en el debate sobre la eliminación de exenciones tributarias se ha planteado ampliar las exenciones a eliminar como crear un impuesto especial que paguen “los super ricos” que alcanzaría a cerca de 15.000 personas en el país.

Es urgente debatir y legislar sobre nuevos ingresos fiscales permanentes ya que son variadas las demandas sociales que deben enfrentarse como la pensión garantizada universal. Un tremendo error para el país sería que se aprobara el gasto fiscal de la PGU sin su adecuado financiamiento fiscal permanente como pretende la administración Piñera buscando entregar los primeros cheques antes de dejar su mandato.

Otra decisión incomprensible, opaca y riesgosa es la licitación que está desarrollando Ministerio de Minería por una cuota de 400.000 toneladas de litio. La realiza en las postrimerías de su mandato, lo hace sin informar a las Comisiones de Minería del Parlamento, incluso declara “secretas” las bases de licitación ante petición de información del Senado, por tanto, la autoridad miente cuando dice que ha sido “transparente” y los principales oferentes son los actuales titulares de concesiones como SQM y Albemarle y no estarían entrando nuevos actores.

En 2015 se definió una política nacional del litio en que participaron diversos actores, la cual fue lamentablemente desestimada por el actual gobierno quién ha preferido hacer licitaciones poco transparentes y vía Codelco no hizo nada para que una empresa pública se involucrará en el desarrollo del litio.

Y así vamos perdiendo competitividad -producto de la falta de sentido estratégico de la administración Piñera- en un área que pudo ser un motor de desarrollo para la próxima década.

Durante próxima administración re-tomar el camino de una política nacional para desarrollo del litio, es clave, pero se requiere que actual gobierno suspenda esta licitación.

Aquí hay 2 ejemplos de la semana que se fue donde el gobierno ahondó la desconfianza en las instituciones, en especial del gobierno que debería velar por el bien común que con Piñera terminó administrando el poder en beneficio de los mismos de siempre. Ahora que empieza un nuevo ciclo político es clave restablecer

que las instituciones deben trabajar y amparar el desarrollo de las comunidades, de las mayorías y ahí está radicada parte de la esperanza que hoy recorre al país.

## **HISTORIA SOBRE TRAMITACIÓN PROYECTO NUEVO INE 2015-2022 (informe para sesión del 12 de enero 2022)**

1. El 2015 la administración Bachelet ingresó a tramitación legislativa un proyecto de ley de fortalecimiento del sistema estadístico y del INE que recogía las recomendaciones OCDE de 2009 creando **un Consejo Estadístico, órgano e instancia técnica, situado dentro de la estructura orgánica del Instituto, fortaleciendo de esta forma su posición como rector del sistema estadístico, y otorgándole continuidad y compromiso a un organismo esencial para la calidad de las estadísticas oficiales del país.**

El 2017 en el Senado, durante la administración Bachelet **reforzó el rol del Consejo Técnico Estadístico en el nombramiento del Director del servicio, proponiendo que el Consejo participará en la generación del perfil y características técnicas que se deberán cumplir para participar en el concurso de nombramiento del Director.**

De la misma forma, y como una manera de cautelar la debida independencia de los consejeros, se elevó el quórum de nombramiento de los propios miembros del Consejo por parte del Senado desde la actual mayoría simple a un quórum calificado de 4/7, mismo quórum exigido para los integrantes de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, el INE contaría con un Director, en el cual estarán radicadas las facultades de Administración y Dirección del Servicio. En este sentido, el Director será para todos los efectos legales será el Jefe Superior del Servicio.

2. Este proyecto de ley quedó **“congelado” desde abril del 2018** en la Comisión de Hacienda del Senado sin ninguna señal de tramitación legislativa hasta abril del 2019 -en que producto crisis IPC gobierno intentó reactivar proyecto-; mientras que a nivel mediático empezó el cuestionamiento a las estadísticas de empleo y remuneraciones del INE por parte del Ministerio del Trabajo con “sus estadísticas” provenientes de registros administrativos del Seguro de Cesantía.

Esto motivó que Oposición en Senado desde enero 2019 pidiera al Ejecutivo reactivar la tramitación del proyecto de ley de nuevo INE.

3. En abril 2019 el Ministro de Economía presentó su propuesta en Comisión de Hacienda en que señaló que desecharon la indicación sustitutiva porque tenían buena evaluación del proyecto del 2015 y presentaron indicaciones sobre su visión de gobierno Corporativo para INE modificando estructura del Consejo Técnico estadístico a 5 miembros, *donde proponen que director INE sea Presidente y jefe de Servicio, es nombrado por Presidente de la República y dura sólo período presidencial.*

4. Esta propuesta del gobierno fue analizada por diversos expertos y ex autoridades del sector en la Comisión de Hacienda quienes expresaron un juicio crítico mayoritario a la propuesta de nueva gobernanza para INE

- Director, Presidente del Consejo Técnico nombrado por Presidente de la República es la peor fórmula ya queda absolutamente dependiente del Gobierno de Turno, **con lo cual se pierde la independencia técnica.**
- Asimetría entre director full time y Consejo Técnico part time
- No hay concurso público para Director como proponía proyecto,
- No hay definición de perfil
- Al eliminar Comité de Coordinación de Ministros se suprime un instrumento de coordinación para mejorar la producción estadística descentralizada (OIT) lo que es criticado como un error

Otra crítica unánime es la falta de mayores recursos económicos y profesionales para INE que está dificultando contratación y retención de estadísticos lo que está afectando la calidad de su producción estadística (Caso IPC es un ejemplo).

6. Desde 2019 la posición permanente de la Oposición en la Comisión -después de escuchar a estos expertos (Céspedes, Clark, OIT, Flores)- fue solicitar que gobierno Piñera retirara su fórmula de gobernanza de Director INE como Presidente del Consejo Técnico, designado por gobierno de turno y **volver a la fórmula del proyecto de Bachelet 2 que está en Comisión de Hacienda que establece Consejo Estadístico Técnico con independencia técnica y en lo principal se debiera exigir un esfuerzo mayor del gobierno de recursos para profesionalizar el INE.**

7. En junio de ese año se realizó una sola sesión de trabajo de asesores técnicos de senadores de Oposición de la Comisión de Hacienda con el Ministerio de Economía. En esa reunión los asesores técnicos plantearon la opinión crítica a las Indicaciones presentadas por ex Ministro Valente en abril 2019 y:

- **Reiteraron que Oposición prefiere un modelo de gobernanza con Independencia Técnica del INE, donde el Consejo Técnico Estadístico que reúna a expertos estadísticos sea nombrado íntegramente por el Senado y cuya Presidencia sea definida entre los Consejeros –sin intervención del Presidente de la República-.**
- Tener estadísticas confiables y sólidas técnicamente requieren independencia del Gobierno de turno que indicación gubernamental no cautela.
- Insistieron que es peligroso para el país que el INE y la producción de estadísticas estén subordinados al gobierno de turno.
- Asimismo, propusieron reponer el Comité de Coordinación de Ministros, lo que permite mejorar la coordinación ministerial para tener mejores productos estadísticos en un país que requiere un upgrade de nuevas estadísticas regionales, comunales y medioambientales.

**8.- Ahora en enero 2022 el Gobierno vía Ministro de Economía y directora INE presentaron un conjunto de indicaciones al proyecto de ley que está desde marzo 2018 y cuyo diseño correspondió a la administración Bachelet 2.**

Son 35 indicaciones del Presidente de la República que no modifican el diseño propuesto en gobierno anterior -que infructuosamente intentó modificar ex ministro Valente en 2019- y que fue respaldado estos años por los senadores de la Oposición en la Comisión de Hacienda.

Son 35 indicaciones que apuntan a hacer ajustes de nombres, adecuaciones a la nueva estructura del Estado y mejores definiciones de los distintos temas que abordan las indicaciones y que no alteran el adecuado diseño institucional que estuvo “congelado” desde 2018.

En artículo 3º sobre definiciones se agrega “políticas Estratégicas Estadísticas”

En artículo 5º se elimina referencia a Consejo Estadístico Nacional ya que esa instancia es parte del INE y no es un nuevo organismo, por tanto, no corresponde mencionarlo en ese artículo descriptivo.

En artículo 7º sobre funciones INE en letra d) se agrega que los productos estadísticos deben ser aprobados previamente por el Consejo Estadístico Nacional, en numeral 3 se elimina función de coordinar el sistema estadístico y en numeral 16 se mejora redacción d norma.

En párrafo 2 en artículo 10 sobre Consejo Estadístico Nacional se reemplaza título de Facultades por “funciones y atribuciones”, en numeral 10 se adecua nominación de Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En artículo 11 se cambia denominación de Consejo Nacional de Estadísticas por **Consejo Estadístico Nacional**, se incorpora la participación permanente del Banco Central y que pueda invitar a las Asociaciones de Funcionarios.

En artículo 12 sobre incompatibilidades con Consejo Estadístico Nacional se ajusta denominación de autoridades como reemplazo de Intendente por delegado presidencial, gobernador regional.

Se establece la incompatibilidad para quienes posean “otra remuneración fiscal” y ella “no registrá para las labores docentes académicas”

Se perfeccionan redacciones en:

En artículo 13 sobre Cesación de Cargo

En artículo 16 sobre funciones del Presidente del Consejo Estadístico Nacional

En artículo 20 sobre función de Director Nacional INE se agrega que podrá contratar expertos nacionales e internacionales y participación en eventos internacionales.

En artículo 21 sobre inhabilidades del Director Nacional INE

En artículo 25 sobre Comité Interministerial de Estadísticas se agrega al Ministro del Trabajo y Previsión Social

En artículo 26 y artículo 27 se hacen ajustes menores de redacción en Comité Interministerial de Estadísticas

En artículo 36, 37, 44 y 46 se perfeccionan redacciones sobre solicitudes de información estadísticas y sobre acceso en archivos de información.

En artículo 50 se perfecciona la redacción del artículo sobre Medición Oficial de la Pobreza.

En artículo 59 se mejora procedimiento sancionatorio en caso de que no se entregue información estadística.

En artículo 70 y 71 se mejora redacción sobre secreto estadístico.

Como se señaló estas indicaciones hacen adecuaciones, mejoran redacciones y NO modifican el diseño institucional aprobado en Comisión de Economía del Senado y que despacho en marzo 2018.

**Por tanto, se propone aprobar esas indicaciones planteadas por ejecutivo para reactivar la tramitación legislativa del nuevo INE -que estuvo inexplicablemente congelado desde 2018- ya que se aprobó diseño planteado en administración anterior.**



*La agenda política de próxima semana estará marcada por nombramiento de gabinete del presidente electo.*

*En sus apariciones públicas el presidente electo ha insistido en el diálogo, la gobernabilidad y "que no era un disfraz para la segunda vuelta"*

*Es importante insistir que se requiere un pacto de gobernabilidad desde marzo 2022 que permita articular esfuerzos en el Senado, sea tanto en la agenda legislativa futura como en la implementación de avances que quedaron consagrados en ley de presupuestos 2022 (recursos para 1er año de 50.000 subsidios habitacionales, para atender a 100.000 pacientes de listas de espera no covid, recursos en inversión para enfrentar crisis hídrica por nombrar programas financiados para 2022).*

*Ese mix de agenda legislativa con iniciativas financiadas en presupuesto 2022 deben ser hoja de ruta para la colaboración constructiva de la DC en la centroizquierda con el gobierno de apruebo dignidad para empezar a implementar agenda de transformaciones que está demandando la sociedad chilena.*

*Esas señales las ha dado presidente electo y debieran ser valoradas en espacio público.*

*Adjunto TIPS para debate político de la semana .-*

## **LAS SEÑALES DE UNIDAD NACIONAL Y GOBERNABILIDAD DEL PRESIDENTE ELECTO**

El presidente electo Gabriel Boric ha dado diversas señales de que en su gobierno promoverá el diálogo, buscará la unidad nacional para darle gobernabilidad al urgente proceso de transformaciones sociales y económicas que apoyó la mayoría de la sociedad chilena el 19 de diciembre pasado.

Adicionalmente en un encuentro el con gran empresariado reafirmó compromiso de su gobierno con el crecimiento, la gradualidad y la responsabilidad fiscal. Incluso señaló que esto "no eran un disfraz de la campaña de la segunda vuelta, sino una

convicción profunda” y así lo ha planteado tanto al gran empresariado sino también con las pymes y el resto de actores de la vida económica en estas semanas de transición.

Además, añadió que “toda transformación se sostiene sobre la base de lo que se hizo antes, y ningún cambio grande, estructural, se logra de la noche a la mañana” insistiendo que Chile necesita cambios, reformas y que ellas deben implementarse gradualmente, pero deben realizarse.

Estas señales políticas le permiten partir con un razonable apoyo político, no tan solo de su coalición Apruebo Dignidad, pero también de la centroizquierda como el PS, PPD y a lo que también se ha ido sumando la DC, colectividad donde parecieran ser mayoría las posiciones que plantean “una colaboración constructiva” con nuevo gobierno, sea en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en la sociedad civil.

O sea, su gobierno empieza a ser apoyado por el electorado de centroizquierda que valora la gobernabilidad, los acuerdos transversales y la gradualidad en las reformas, pero eso no es suficiente -por lo menos- en el futuro Parlamento, donde la izquierda más la centroizquierda es apenas el 50% del Senado.

#### DESAFÍOS POLÍTICOS PARA PRIMER GABINETE.-

El primer desafío que tiene el Presidente electo es elegir un gabinete de ministros y ministras que implementen esa política de acuerdos transversales sobre la base de un pacto de gobernabilidad con la centroizquierda que le permita partir un importante apoyo en el Parlamento, él requiere un elenco ministerial que sea el reflejo de esa convicción gradualista por el crecimiento sostenible, por la responsabilidad fiscal y por mejores empleos, pensiones, educación y salud.

Es clave delinear ese pacto de gobernabilidad con la centroizquierda y además debe ser capaz de instalar prioridades ciudadanas que faciliten un diálogo político pragmático con una centroderecha más social, que podría encabezar parte de RN y Evopolis.

Estas señales del presidente electo han instalado un optimismo inicial en la opinión pública frente a la gestión gubernamental que parte el 11 de marzo y para enfrentar

los desafíos que -debieran ser parte del pacto de gobernabilidad- como por ejemplo recuperar la economía que para 2022 y 2023 se proyecta un mediocre crecimiento de alrededor del 2%, para enfrentar la nueva ola covid19 de mayores contagios, el mejoramiento de las pensiones con la aprobación de una pensión universal con el financiamiento fiscal permanente, implementar una agenda de seguridad ciudadana que devuelva la tranquilidad en los barrios hoy fuertemente amenazados por los Narcos.

Es interesante como el presidencialismo de minoría de Gabriel Boric asume con realismo ese dato político y se despliega generando diversas señales políticas tendientes a construir puentes con la centroizquierda para implementar una agenda gradual de transformaciones que permitan construir mayorías sociales y políticas que permitan avanzar hacia un nuevo Chile con mayores niveles de equidad social.

Es clave en este desafío que presidente electo concite el apoyo del resto de la centroizquierda, del mundo de independientes, de las PYMES, de las clases medias, de los liderazgos regionales en torno a una agenda realista y acotada de iniciativas gubernamentales y legislativas que muestren una capacidad de gestión política de interpretar y representar mayorías, más allá de su limitada frontera partidaria que es Apruebo Dignidad. Es clave que sea capaz de liberarse de las presiones políticas, de los cuoteos, de los primeros anillos que buscan limitar la capacidad de gestión política y social de su gobierno.

Un presidencialismo de minoría solo puede apelar al diálogo, a la búsqueda de puntos de encuentro para una agenda de transformaciones que sea capaz de sumar a mayorías políticas y sociales, superando así la situación de fragmentación en que está hoy la sociedad chilena.

Eso implica instalar desde el 11 de marzo una lógica de colaboración y diálogo -que lamentablemente el país abandonó hace varios años atrás- y que hoy en este nuevo mundo es clave para el éxito de los países.

Ojalá tengamos desde marzo ese clima de colaboración, de diálogo amplio, de gradualismo para sacar a Chile del estancamiento en que nos dejó Piñera.

## **INFORME SOBRE PROYECTO DE LEY QUE MODERNIZA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS**

**Senador JORGE PIZARRO**

La modernización del sistema de Compras Públicas ha sido un tema demandado transversalmente en los debates de los últimos años de las leyes de presupuesto, ya que cerca del 20% del presupuesto fiscal se destina a compras públicas y por lo tanto, se requiere más transparencia, más probidad y más apoyo a las PYMES.

Este proyecto de ley de modernización de las compras públicas fue exigido en esos debates, pero tuvo un rápido trámite en la Cámara de Diputados y no se acogieron inquietudes de pymes y académicos y pasó al Senado en 2º trámite Constitucional en el mes de julio del 2021 y la Sala acordó que fuera visto por Comisión de Economía y Hacienda en su caso.

La Comisión de Economía realizó un proceso de audiencias públicas en que opinaron instituciones como la Contraloría General de la República, FNE, expertos, instituciones de la sociedad civil como Espacio Público, Fundación Observatorio Fiscal, diversos gremios PYMES que coincidieron en la debilidad del proyecto de ley en materia de respeto a las normas de probidad especialmente respecto de quienes toman decisiones de compras públicas en las instituciones públicas, ampliar el ámbito de la ley a las Corporaciones municipales, falta de políticas pro PYMEs, incentivar planes anuales de compras públicas, falta de reforzamiento del Tribunal de Contratación Pública entre otras materias cuestionadas al proyecto del Ejecutivo en el período de audiencias.

Las críticas del señor Contralor acerca del debilitamiento de las normas de probidad del proyecto original del Ejecutivo “gatillaron” la decisión

unánime de la Comisión de Economía -a inicios del mes de noviembre- de emplazar al Ejecutivo si existía la voluntad política de modificar el proyecto de ley original en la línea de fortalecer la probidad, la transparencia y una política pro PYME.

En función de eso se conformó una Mesa de trabajo técnico con asesores de la Comisión de Economía -integrado por asesores de los senadores, expertos y dirigentes PYMES- con representantes de Hacienda y Chilecompras que trabajaron durante varias sesiones para concordar un Acta de cambios a introducir al proyecto de ley que moderniza el Sistema de Compras Públicas que permitió aprobarlo en general en la Comisión de Economía del Senado por unanimidad, con la voluntad explícita de las partes de que esa Acta de Acuerdos iniciales era la hoja de ruta para presentar indicaciones comunes en la discusión en particular.

En la Comisión de Economía se aprobó en general y se pide lo mismo ahora a la Sala sobre la base del compromiso de Hacienda de cumplir esta Acta que se traducirán en Indicaciones para que sea votado en particular en la comisión y en la sala.

Esta Acta con los acuerdos para aprobar en general la modernización de las compras Públicas, quisiera destacar lo siguiente:

**Comisión Técnica sobre el Proyecto de Ley que moderniza el Sistema de Compras Públicas (Bol. 14.137-05)**

Luego de reunirse los asesores de los senadores de la Comisión de Economía del Senado y los asesores del Ministerio de Hacienda, los días 15, 16, 17 y 19 de noviembre de 2021, se acordó trabajar conjuntamente en las siguientes modificaciones al proyecto de ley que moderniza el Sistema de Compras Públicas:

**1. Ámbito de Aplicación de la Ley de Compras Públicas:**

1. Ampliar aplicación de la Ley de Compras Públicas, de manera obligatoria, a las Corporaciones o Fundaciones Municipales, y aquellas de las que participen organismos de la Administración del Estado, señaladas en el Reglamento...
2. Establecer que los organismos con autonomía constitucional señalados en esta Ley, deberán a la entrada en vigencia de ella, realizar sus compras y adquisiciones a través del Sistema de Compras Públicas, salvo casos fundados.

## 2. Procedimientos de Compra:

1. Reforzar el carácter de regla general de la licitación pública, eliminando la necesidad de fundamentar su aplicación.
2. Reformular el actual procedimiento de trato directo, de la siguiente forma:
  - i. Cambiar su denominación, a "Contratación de Proveedor Particular con publicidad", u otra, que exprese que se trata de un procedimiento no competitivo y excepcional.
  - ii. Limitar sus causales a la contratación de bienes y servicios en situaciones de urgencia o emergencia, cuando se realicen contrataciones en el extranjero, cuando exista un único proveedor del bien o servicio que se requiere adquirir, y aquellas señaladas en el Reglamento.
  - iii. Precisar la causal de contratación de bienes y servicios en circunstancias de emergencia, para evitar que se generen abusos en su implementación.

Modificar las definiciones de procedimientos especiales de contratación señalando sus objetivos.

Modificar el concepto de Plan Anual de Compra, y permitir a ChileCompra exigir su modificación a los organismos de la Administración, cuando se vulnere la Ley de Compras Públicas, sin que ello implique inmiscuirse en el mérito, oportunidad o conveniencia de las decisiones de compra de las entidades compradoras.

Aumentar el umbral establecido para utilizar el procedimiento de Compra Ágil centrándolos en los proveedores de menor tamaño.

### 3. Normas de probidad y transparencia:

Establecer de manera uniforme para la Administración del Estado, los órganos con autonomía constitucional, el Banco Central y las empresas públicas, la prohibición de contratar para sus directivos, las sociedades de las que ellos participen directamente o como beneficiarios finales, o sus parientes hasta el 3° grado, con la entidad de la que formen parte, por el período en que trabajen en ella, y hasta 6 meses desde su desvinculación.

Establecer la prohibición para contratar con el organismo en el que trabajan, para los funcionarios que participen en los procesos de compra, las sociedades de las que estos participen directamente o como beneficiario final, y sus parientes hasta el 2° de consanguinidad o afinidad, por hasta 6 meses después de que abandonan sus funciones. Estos funcionarios deberán realizar una declaración de patrimonio e intereses, y actualizarla semestralmente.

Incorporar a los funcionarios señalados en el párrafo anterior, y los funcionarios directivos de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al listado de personas fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero.

Ampliar la inhabilidad para contratar con el Estado a los condenados por cohecho, para aquellas empresas condenadas por este delito en el extranjero.

Extender a agentes públicos, la obligación de declaración jurada de ausencia de conflictos de interés.

Perfeccionar el Registro de Proveedores, incorporando información sobre sus beneficiarios finales, utilizando la información existente en los demás organismos del Estado.

vi. Establecer que ChileCompra deberá monitorear el desarrollo de este procedimiento de contratación, y dictar circulares vinculantes para los organismos de la Administración, para velar por su correcta aplicación.

### 4. Medidas en favor de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales:

Se acuerda que se creará un título VIII, sobre promoción de la participación de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el Sistema de Compras Públicas,

Establecer como función de ChileCompra, promover la participación de las PYMES, en coordinación con CORFO y el Ministerio de Economía, e impulsar la articulación local de proveedores.

Establecer que no sólo ChileCompra, sino que todos los órganos del Estado deberán promover la participación de las empresas de menor tamaño y los proveedores locales en el mercado público, y la desconcentración en montos o cantidades de bienes o servicios a adquirir, en las adjudicaciones que realicen. Lo indicado es sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en los acuerdos comerciales suscritos por Chile que se encuentren vigentes.

Establecer que el procedimiento de Compra Ágil será realizado con preferencia para empresas de menor tamaño y proveedores locales

Para facilitar la incorporación de las empresas de menor tamaño en el Registro de Proveedores, los diversos organismos públicos que mantengan dicha información, incluyendo el SII, la Dirección del Trabajo, y la Tesorería General de la República, deberán entregar la información necesaria a la Dirección de Compras y Contratación Pública.

Realizar una consulta pública de toda instrucción de ChileCompra que pueda afectar a empresas de menor tamaño, para conocer la opinión de estas empresas.

Aumentar el umbral para la exigencia de garantías de seriedad y fiel cumplimiento. Regular el pago oportuno a proveedores.

Otras medidas:

Aumentar N° de jueces del Tribunal de Contratación Pública, de 3 a 6.

Mejorar la regulación de la subcontratación en la contratación pública.



Suprimir el Capítulo VIII que propone el Proyecto de Ley, sobre el Consejo Asesor de ChileCompra.

6. Establecer que Contraloría General de la República emitirá anualmente un informe en el cual califique el ejercicio de las facultades normativas (dictación de instrucciones) de ChileCompra y la facultad de suspender procesos, pudiendo dictar recomendaciones para su correcto ejercicio.
7. Regular la aplicación de multas y otras medidas a proveedores, estableciendo principios de tipicidad, proporcionalidad, contradictoriedad y debido proceso.

Esta Acta de Acuerdo es un compromiso común entre Ministerio de Hacienda -lo que fue ratificado por subsecretario Weber en la Comisión- y los senadores para presentar indicaciones comunes en esta dirección, lo que permitió destrabar el proyecto en la Comisión de Economía del Senado en noviembre pasado; fue aprobado en general y los equipos técnicos han seguido trabajando para traducir en Indicaciones los temas del Acta para el debate en particular.

Nuestro llamado al Ejecutivo es que se cumpla el Acta de Acuerdo lo que facilitará la tramitación en general ahora y en particular en las próximas semanas.

Existe consenso en este Senado que Un sistema de compras públicas que transa 20% del presupuesto fiscal o sea alrededor de 15.000 millones de dólares requiere más transparencia, más probidad y también requiere apoyar a las pequeñas empresas, especialmente en regiones y aquí se abre la oportunidad de avanzar en esa dirección con las indicaciones que se están trabajando.

Por eso pido a la Sala aprobar este proyecto de ley en general hoy y que se fije como fecha para presentar indicaciones hasta el lunes 28 de febrero a las 12,00 hrs en la Comisión de Economía del Senado.

He dicho sra presidenta

**TIPS sobre proyecto de ley del Gobierno que "regula el prorratio y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generados durante la pandemia por covid19 y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de éstas".**

### **SENADORA LORETO CARVAJAL**

Este es un proyecto de ley que los senadores de Oposición estuvimos pidiendo desde mayo pasado.

Los deudores de servicios básicos se incrementaron por la pandemia. Tanto en agua como en electricidad alcanza a alrededor de 700.000 familias en cada sector, que probablemente sean las mismas.

No es solución seguir acumulando deudas en estas familias deudoras, se requiere una acción solidaria del Estado, de las empresas proveedoras para enfrentar y reducir esta deuda.

Las 700 mil familias morosas que no han pagado estos servicios básicos, es producto de la falta de ingresos, del desempleo y también debemos reconocer que ellas son entre 10% a 15% del total de clientes residenciales, lo que significa que una gran mayoría ha cumplido con pagar mensualmente sus servicios básicos.

Este proyecto reivindica la solidaridad al interior de la sociedad chilena, que se debe ayudar a estas familias que producto de la pandemia no pudieron pagar los servicios básicos de electricidad y servicios sanitarios.

Que se requiere aporte del Estado y también de las empresas proveedoras, que estos años han tenido importantes utilidades y que en este período de crisis social deben ayudar a las familias vulnerables y de ingresos medios.

Se logró en este diálogo con los ministros MOP y Energía concordar un proyecto de ley que genera un subsidio fiscal para los próximos 48 meses con un tope del 15% de la cuenta mensual que amortice la deuda acumulada y en caso de que quede un excedente este se extinguirá para deudor siendo absorbida por la empresa proveedora.

En este mecanismo simple se armoniza el aporte fiscal -que alcanza a más de US\$ 100 millones en los 4 años- con el aporte de las empresas proveedoras con la deuda que no alcanzó a cubrir el subsidio fiscal en los próximos 48 meses.

Hay proveedores que son empresas de menor tamaño como los comités de agua potable rural que han sido apoyados por MOP y cuyas familias reciben subsidios fiscales. En el caso

eléctrico hay cooperativas eléctricas algunas grandes con importantes utilidades y otras pequeñas que como proveedoras en caso de pérdidas debieran ser apoyadas por el Estado, pero hay otras cooperativas que tienen ganancias que pueden absorber las normas de este beneficio.

Aquí lo importante es que las familias deudoras -independiente del tamaño de su proveedor-reciban el subsidio fiscal que en 48 meses extinguirá su deuda actual.

Sra Presidenta , este proyecto de ley empieza a resolver un drama que nos heredó la pandemia y la crisis económica que fue el incremento de la deuda con los servicios básicos por parte de 700 mil familias vulnerables y de ingresos medios y por eso, creo que amerita aprobarlo en general y particular en esta Sala del Senado.

## Debate en sobre PGU y eliminación de exenciones y nuevas modalidades de recaudación para financiar PGU

El anuncio de una Pensión Garantizada Universal de \$185.000 que fuera complementaria al Pilar Solidario y se ampliará del 60% al 90% de los pensionados abrió la discusión de su financiamiento fiscal permanente ya que el costo fiscal llega a casi 1% del PIB en régimen y el proyecto original del Ejecutivo sobre eliminación de exenciones tributarias solo recaudaba 0,35% del PIB.

Esta falta de financiamiento fiscal permanente fue el centro de la crítica del Consejo Fiscal Autónomo del 6 de enero pasado donde cuestionó la fórmula de financiamiento del Ejecutivo, señalando:

- a) Un primer elemento relevante para analizar el financiamiento se refiere al período de la proyección fiscal, el que debería ampliarse y contemplar al menos 50 años.*
- b) Para la sostenibilidad fiscal es fundamental cumplir el principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes*
- c) El Consejo sugiere reemplazo Reducción del aporte obligatorio que anualmente debe realizarse al FRP por otra fuente de financiamiento con características de permanente*

Esta crítica del CFA -órgano plural- generó que Ministerio de Hacienda en la tramitación en el Senado presentará un paquete de nuevas medidas para ampliar la recaudación fiscal de 0,32% del PIB, que sumado al proyecto original de 0,35% del PIB, permite llegar a 0,67% del PIB con las siguientes nuevas medidas de recaudación fiscal aprobadas en Comisión de Hacienda del Senado.

### Nuevas Medidas de Recaudación Fiscal

	% del PIB
i) Sobre tasa al impuesto territorial	0,04%
ii) Sobre tasa a los bienes de lujo	0,05%
iii) Patente a Concesiones Mineras	0,11%
iv) Eliminación de exención tributaria a los contratos De leasing	0,10%
v) Eliminación crédito especial de adquisiciones De activos fijos	0,01%
vi) Eliminación de beneficios de los excedentes de Libre disposición	0,01%

Mayor Recaudación

0,32% del PIB

En el debate en la Comisión de Hacienda del Senado se debatieron y votaron estas propuestas y la sobre tasa al impuesto territorial fue aprobada por 4 a 1 con el rechazo del senador Coloma quién cuestiona "los impuestos a los patrimonios".

La Eliminación de beneficios de los excedentes de Libre disposición fue rechazado por 4 a 1 (sólo votó a favor senador Montes) y la eliminación del beneficio tributario a los contratos de leasing fue aprobado por unanimidad con las dudas del senador Coloma que argumentó que los leasing son usados por las PYMES.

La sobre tasa a los bienes de lujo quedaron pendientes para el lunes ya que Comisión pidió mayor precisión sobre los bienes a gravar como aviones, yates, helicópteros y despejar si en el caso de los aviones están incorporados los clubes que prestan servicios de instrucción en las regiones.

Adicionalmente el impuesto a los super ricos que fue introducido en la Cámara de Diputados fue rechazado por 4 a 1 abstención del senador Montes.

Se aprobó la aplicación de IVA a los servicios con 4 a 1 abstención de senadora Rincón, se aprobó eliminación de IVA a la Construcción con 4 a 1 abstención del senador Coloma, se aprobó el 10% con que se grava a ganancias en el mercado de capitales con dudas de senadora Rincón y senador Coloma.

Este debate en la Comisión de Hacienda sobre el financiamiento con eliminación de exenciones y nuevos impuestos que recaudan 0,67% del PIB anticipan un largo debate en la Sala.

En torno a la PGU se agregaron indicaciones en el Senado, pero sigue pendiente la resolución de la situación de las personas que reciben pensiones reparatorias en DDHH como Rettig y Valech que aún no acceden a la PGU, generando una odiosa discriminación.

## PRESIDENTE ELECTO Y SU PRIMER GABINETE

La nominación del primer gabinete de cualquier gobierno es un potente momento comunicacional ya que le permite marcar su impronta de lo que quiere realizar y como pretende realizarlo y se instala como principal actor de la arena política.

El Presidente Electo con su primer gabinete ha dado varias señales. Ha formado un elenco ministerial de centroizquierda y no se redujo a la izquierda de Apruebo Dignidad buscando salir de su condición de Presidente de minoría en el Parlamento a un Presidente de coalición con semi mayoría (ya que la ausencia de la DC lo hace aún ser minoría en el Senado), lo cual le exigirá un alto grado de flexibilidad política buscando acuerdos transversales para poder avanzar en su agenda de transformaciones.

Los resultados en la elección parlamentaria no le permiten aferrarse a un purismo programático, debe impulsar la propuesta programática que acordó con los equipos de las otras candidaturas de la centroizquierda en la segunda vuelta y otros ajustes que acuerde buscando mayorías en el Parlamento.

También debe ser capaz de impulsar en ciertas áreas una gestión que permita implementar avances que logró la oposición en la ley de presupuestos 2022 que ya tienen financiamiento para este primer año de gobierno como la adjudicación de 50.000 subsidios habitacionales DS 49 para las familias vulnerables y de ingresos medios, en Salud Pública hay \$120.000 millones destinados a atender listas de espera no Covid e incrementar los recursos para la Salud Primaria en \$36.000 millones en el per cápita, en las Regiones hay más recursos ya que se permitió usar el saldo inicial de caja de \$50.000 millones, en Transantiago se flexibilizó la glosa que permite expandirlo a comunas con alto desarrollo inmobiliario como Lampa, Colina, Padre Hurtado, Buin y Calera de Tango, en Educación Pública se creó un Fondo de Recuperación por \$40.000 millones para 2022, o sea hay recursos para poder implementar nuevas políticas para este 2022 que dependerán de la capacidad de gestión de los nuevos Ministros.

Este gabinete en lo económico da una señal de gradualismo, responsabilidad y foco en hacer buenas políticas públicas al nombrar como Ministro de Hacienda a Mario



Marcel -quién abandona la comodidad del Banco Central para aportar al país desde este complejo cargo-. Probablemente un sector de la izquierda dura cuestionará este nombramiento, pero logró despegar dudas e incertidumbres de múltiples actores sociales y económicos que ahora miran con más confianza un discurso sobre “la prioridad en la recuperación económica” y en “sentar las bases para un crecimiento sostenido y sostenible en los próximos años” como señaló el mismo Marcel.

Otro aspecto destacado del nuevo Gabinete es que se nombró en ciertas áreas a destacados académicos que tienen amplia legitimidad social para ejercer esos cargos ministeriales y no son simples operadores de los partidos políticos como muchas veces ocurrió en los últimos años, destacando Juan Carlos Cruz en Transporte, Maisa Rojas en Medio Ambiente, Claudio Huepe en Energía y también Marcel, eso le hace bien a la necesaria modernización del Estado.

Otros aspectos destacados son la mayor presencia de mujeres, la baja edad promedio, la diversidad sexual, pero lo más relevante a despegar desde marzo próximo es si este elenco será capaz de administrar las altas expectativas de cambios sociales en parte de la ciudadanía con el necesario realismo que implica la complejidad de la tarea gubernamental, donde subsisten problemas de larga data donde diversos gobiernos han fracasado está última década como es en materia de estancamiento económico -ya 12 años de mediocre crecimiento y con perspectivas de un segundo semestre de fuerte ralentización de la actividad-, en materia de inseguridad en los barrios con aumento de robos y homicidios, el rebrote de la pandemia.

El realismo mostrado por el Presidente Electo en la conformación de su gabinete muestra que se viene un año político intenso y complejo, pero que puede traer sorpresas si logran construir acuerdos transversales para avanzar en mejores políticas públicas.

## Tips para Debate en sobre PGU y eliminación de exenciones y nuevas modalidades de recaudación para financiar PGU

### Sobre PGU:-

Hoy estamos analizando el proyecto gubernamental que crea una Pensión Garantizada Universal de \$185.000 que será complementaria al Pilar Solidario y se ampliará del 60% al 90% de los pensionados.

Los voceros gubernamentales han señalado que recogen las distintas propuestas de la campaña presidencial.

Al respecto quisiera señalar que es una lectura sesgada, ya que nosotros propusimos una reforma integral al fracasado modelo de las AFP's y avanzar hacia un sistema de pensiones público, solidario y con ahorro colectivo donde dejaramos atrás el modelo individualista y fracasado de las AFP's.

Tener un primer piso común y parejo como parte del sistema no contributivo es importante, **pero este debía complementarse con reformas al sistema contributivo y a un nuevo modelo de administración.**

Legislar sobre una PGU es un avance, pero ahí no termina la reforma en pensiones.

Quiero señalarlo acá: seguiremos promoviendo esa reforma integral que eleve este piso común, pero también cree un fondo de ahorro colectivo y superemos la administración de las AFP's en la próxima etapa gubernamental.

Aquí no se termina la reforma de pensiones -como creen alegremente en los directorios de las AFP's-, aquí comienza, porque esta PGU de \$185.000 significa para los 600.000 actuales perceptores de la Pensión Básica Solidaria un modesto incremento de \$9.000 mensuales en febrero.

Creemos que se puede elevar este piso común, parejo a lo menos a \$225.000 como lo propusimos en la campaña presidencial y su costo fiscal es accesible.

Para quienes recibirán estos \$185.000 como incremento neto son los más de 500.000 pensionados que hoy no son parte del pilar solidario y que son parte del 60% al 90% de los pensionados, que reciben pensiones autofinanciadas de las AFP's hasta \$630.000 mensuales.

Creo importante resaltar esto para que quede claro a la opinión pública los reales efectos de esta nueva legislación y también por que seguirá abierto el compromiso de incrementar la PGU para llevarla a los niveles planteados en la campaña presidencial.

También me preocupa que siga pendiente la resolución de la situación de las personas que reciben pensiones reparatorias en DDHH como Rettig y Valech que aún no acceden a la PGU, generando una odiosa discriminación que a estas alturas de la vida nacional es incomprensible.

Si este gobierno no lo quiere realizar llamo al próximo gobierno a que esta discriminación la resolvamos en la próxima legislatura.

## b) Sobre Financiamiento fiscal

Durante semanas -a pesar de múltiples críticas- tuvimos al Ministro de Hacienda señalando que proyecto del gobierno estaba financiado fiscalmente y nos hablaba de las holguras del presupuesto 2022, de la programación financiera hasta 2026.

Pero lamentablemente no entendía que nuestra crítica siempre se hizo desde la responsabilidad fiscal, es decir que si se otorga un beneficio social permanente se requería nuevos ingresos fiscales permanentes.

O sea, si había un mayor gasto de 1% del PIB también debía tener las fuentes de financiamiento de ese mayor gasto y no sólo un tercio como propuso tenazmente Hacienda durante semanas.

Afortunadamente la institucional previsional y fiscal funcionó ya que tanto el Consejo Previsional Consultivo como el Consejo Fiscal Autónomo cuestionaron el financiamiento propuesto por el gobierno.

No fueron los partidos políticos, ni académicos sobreideologizados los que cuestionaron el financiamiento fiscal fueron instituciones creadas pluralmente con miembros nominados por este Senado.

En el Caso del Informe del Consejo Fiscal Autónomo fue lapidario en su informe del 6 de enero -que fue reiterado la semana pasada en la Comisión de Hacienda donde señaló que

*a) "Un primer elemento relevante para analizar el financiamiento se refiere al período de la proyección fiscal, el que debería ampliarse y contemplar al menos 50 años".*

La propuesta de financiamiento del gobierno era clara hasta 2026 y los cálculos de proyección del gasto fiscal solo los hacía por 30 años. O sea técnicamente Hacienda recibió el reproche del CFA

*b) "Para la sostenibilidad fiscal es fundamental cumplir el principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes"*

Claramente propuesta del gobierno al principio financia 1/3 con nuevos ingresos permanentes, ahora en Senado avanzó a 2/3 de ingresos permanentes, pero aún no cumple con lo sugerido de financiar la totalidad con nuevos ingresos fiscales

*c) El Consejo sugiere reemplazo Reducción del aporte obligatorio que anualmente debe realizarse al FRP por otra fuente de financiamiento con características de permanente*

Esta recomendación la acogió Hacienda en el Senado y eliminó el uso del Fondo de reserva de Pensiones y conocimos un nuevo paquete de nuevos impuestos y otras eliminaciones de exenciones que veremos en particular.

Lo destacable para el futuro del país es que funcionó la institucionalidad fiscal.

En este trámite se incremento la recaudación con nuevos impuestos - algunos deben ser perfeccionados para que no generen desincentivos como el IVA a los servicios que puede afectar a las PYMES y el impuesto al lujo donde pueden pagarlo los clubes de aviones y no los aviones de lujo que están inscritos a nombre de las empresas- y se aumentó la eliminación de exenciones, camino por el cual debemos perseverar.

Pero este debate es un anticipo de la Reforma Tributaria que debe realizarse en próximo gobierno para avanzar en mayor equidad social.

Al respecto no comparto decisión de Comisión de Hacienda por 4 votos a 1 de eliminar el artículo 6° del proyecto, que fue incorporado en la Cámara de Diputados, que es la creación del "impuesto patrimonial a las personas naturales", que según estimaciones parlamentarias recaudaría 0,5% del PIB.

Ya lo hemos dicho este proyecto financia solo 2/3 del gasto permanente de la PGU que llega a casi 1% del PIB.

O sea hay cerca de un tercio (1/3) de mayor gasto que no tiene financiamiento con ingreso fiscal permanente y el país se merece un debate sobre mayores impuestos al patrimonio de las personas más ricas del país que permitan hacer efectiva la solidaridad mejorando las pensiones.

También el país se requiere avanzar en mayor transparencia tributaria y en darle más facultades a SII y Aduanas para disminuir la evasión y la elusión tributaria que es muy alta en el país.

El país con el nuevo gobierno requerirá una reforma tributaria que permita por distintas vías aumentar la recaudación fiscal y es una confusa señal política que hoy en enero 2022 -ad portas de que asuma nuevo gobierno- se apruebe eliminar este artículo 6° del Informe de la Cámara de Diputados.

No compartimos que se apruebe eliminar y de esa manera no se pueda seguir debatiendo sobre un impuesto patrimonial a las personas naturales.

Aquí hay sectores políticos que están dispuestos a gravar el consumo - elevando el IVA que saben pagan más los más pobres, sabiendo que es regresivo-, a gravar las utilidades de las empresas, pero en sociedades tremendamente desiguales lo que genera progresividad tributaria son los impuestos patrimoniales y aquí en esta sala hay sectores que NO quieren crear y elevar los impuestos patrimoniales.

Este proyecto eleva una sobre tasa a un impuesto territorial por el mayor valor de la vivienda que no fue aprobado por unanimidad en la Comisión.

Insisto no es una buena señal que eliminemos este artículo 6º del Informe de la Cámara.

El país necesita más recursos fiscales para poder atender las necesidades en Salud, en Protección Social, mejorando la PGU, para invertir en Innovación y Ciencias y el nuevo equilibrio democrático requiere tener impuestos al patrimonio como parte del menú de un real sistema tributario progresivo que hoy no tenemos y que espero podamos empezar a abordar en la próxima legislatura.